



No hay cambio imposible para un pueblo que se mostró indomable en sus encrucijadas históricas.

(Fernando Cardenal, ministro de Educación de Nicaragua entre 1984 y 1990)

LOS HECHOS

Nicaragua vive momentos dramáticos desde el anuncio de la reforma del sistema de Seguridad Social, el pasado 19 de abril, que imponía el incremento en las cotizaciones al tiempo que la reducción en las prestaciones. Un abuso (otro más) provocado por la desastrosa y corrupta gestión del sistema de pensiones, y en general de la sanidad pública, que fue respondido espontáneamente con una indignación y movilización social de inesperada magnitud, en todo momento pacífica.

La repuesta del gobierno ha sido una escalada represiva que ha provocado hasta la fecha más de trescientos muertos y miles de heridos, causados en su inmensa mayoría por las fuerzas policiales y las organizaciones armadas afines al gobierno.

Cabe destacar, como hitos en la movilización popular, la manifestación que se realizó el día 30 de mayo, día de la Madre, con una multitudinaria marcha donde se produjeron 14 muertes a manos de las fuerzas represivas; y el paro general, el 14 de junio, de seguimiento mayoritario en todos los sectores de la economía.

Los informes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, de la Organización de Estados Americanos) como de otras organizaciones independientes de derechos humanos (Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), no han hecho sino corroborar la represión contra las movilizaciones ciudadanas, así como otras formas de agresión entre las cuales se encuentran la negativa a atender a manifestantes heridos en los hospitales públicos, y los ataques, a través del bloqueo de algunos medios de comunicación, a la libertad de expresión por parte del gobierno, en el marco de una general criminalización de la protesta.

En la actualidad, varias de las principales ciudades nicaragüenses (Masaya, Catarina, Niquinohomo, Jinotepe, Diriamba, etc.), así como carreteras troncales, se encuentran bloqueadas por barricadas ('tranques'), con las que la población intenta defenderse del ataque de las fuerzas policiales y parapoliciales.

La confrontación en la calle se dirime paralelamente en la mesa de negociación (el llamado 'Diálogo Nacional'), entre los representantes del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), que agrupa al conjunto de la oposición, con la mediación de la iglesia (Conferencia Episcopal de Nicaragua - CEN), si bien hasta la fecha este han sido sólo infructuosos encuentros donde la retórica conciliadora de los representantes gubernamentales ha sido, sistemáticamente, desmentida por la represión contra la población.



LOS ANTECEDENTES

¿Cómo se ha llegado en unas pocas semanas a este estado de cuasi guerra civil en un país que, hasta hace poco, llamaba la atención por su relativa paz social?

Los más recientes indicios de lo que se estaba fraguando en las entrañas de la sociedad nicaragüense, fueron las múltiples muestras de rechazo, durante los últimos años, a la construcción de un canal interoceánico seco por parte de un consorcio de empresas chinas.

Esta operación supone no sólo la renuncia a la soberanía sobre los territorios cedidos a precio de saldo por el gobierno, sino también una masiva agresión medioambiental al lago de Nicaragua, una de las reservas más importantes de agua en la región, junto con el expolio de miles de pequeños campesinos, que se han movilizado una y otra vez en contra de este ataque.

Del mismo modo, distintas comunidades indígenas se han opuesto al saqueo de sus recursos naturales, principalmente madereros, como es el caso de la reserva natural de Bosawás, donde han sido despojadas de sus derechos ancestrales, garantizados en teoría por la propia Constitución.

El fin de la aparente paz social se explica también por el agotamiento de los recursos financieros provenientes de Venezuela, que habían permitido al gobierno practicar una política de asistencialismo clientelar (ayudas para viviendas, bonos alimentarios...) fidelizadora de sectores sociales que malviven en la pobreza, además de servir a la familia Ortega-Murillo, en el poder, para acumular enormes riquezas (los fondos manejados de esta forma se estiman en más de 4.000 millones de dólares), desde el establecimiento del convenio con Venezuela en 2006.

Hay que recordar, a este respecto, que un 80% de la población nicaragüense vive con dos dólares al día, o menos, y se calcula que el 80% de la actividad económica en el país es de carácter informal. El resultado es que, a pesar de los optimistas datos macroeconómicos (crecimientos por encima del 4% anual), la brecha de la desigualdad se ha seguido agrandando en los últimos años.

Por otra parte, el orteguismo, en el poder desde al año 2007, venía garantizándose la estabilidad política mediante su alianza con parte de la casta residual del sandinismo y con la oligarquía tradicional. Mientras los negocios han sido prósperos para estas élites económicas, se ha ignorado la progresiva conversión de la vida política en un remedo de democracia.

El resultado es un régimen cada vez más autócrata, una cleptocracia de hecho, en la que el estado y el marco institucional y legal se han ahormado a los intereses de la familia presidencial, ya sea suprimiendo la limitación de mandatos, o asignando la vicepresidencia del gobierno a la esposa del presidente.



LOS ACTORES

a) El pueblo autoconvocado

Las movilizaciones actuales se caracterizan por carecer de un entramado organizativo, asociativo o partidario previo. Se trata de un movimiento espontáneo, autoorganizado contra las agresiones gubernamentales. Un movimiento, en su propia definición, “autoconvocado”, en el que los y las estudiantes juegan un papel destacado, bajo la Coalición Universitaria, organización democrática y apartidista en la que se engloban distintas organizaciones: Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Movimientos 19 de abril, Alianza Universitaria de Nicaragua, etc.

Esta Coalición se ha constituido, al calor de las luchas desde la mayoría de los centros universitarios, públicos y privados, del país, aunque desde el gobierno se la intenta descalificar como organización de delincuentes y antisociales, a través de diferentes teorías conspirativas según las cuales los movimientos estudiantiles estarían manipulados por la derecha.

b) La ACDJ

La oposición se ha dotado de una coordinación instrumental con vistas a la participación en los diálogos con el gobierno, la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), en la que participan los empresarios del COSEP junto a movimientos sociales como el campesino, organizaciones feministas y de la sociedad civil, y los distintos colectivos que integran la Coalición Universitaria.

c) La iglesia católica

A la vista de la reacción criminal de Ortega frente a las movilizaciones populares ha optado por situarse al lado de estas, ofreciéndose la Conferencia Episcopal como protectora al tiempo que interlocutora debido al hecho de ser probablemente la única entidad aceptada y respetada por ambas partes.

d) El ejército

Las Fuerzas Armadas no han participado hasta el momento directamente en la contención de la revuelta social, habiéndose pronunciado la cúpula militar en términos neutrales por el diálogo y la pacificación. Resulta aventurado especular sobre el papel que pueda jugar el ejército en las posibles salidas a la crisis, dadas sus peculiares características, entre otras sus propios intereses financieros, pues dispone de bienes en forma de inversiones que gestiona corporativamente.



ESCENARIO DE MINIMOS PARA UNA SALIDA PACÍFICA

Hay una unánime convicción en que cualquier salida digna y pacífica de la crisis pasa, inevitablemente, por la renuncia incondicional del actual gobierno y del aparato estatal orteguista. Tras ello se abre un escenario de transición con unos requisitos mínimos como la constitución de una comisión internacional para la verdad y justicia respecto a los crímenes recientes; formación de un gobierno provisional de consenso; modificaciones legislativas clave (Constitución y Ley Electoral fundamentalmente); renuncia colectiva de los miembros del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia; y convocatoria de elecciones constituyentes.

SOLIDARIDAD BASADA EN EL COMPROMISO CON LA VERDAD

El pueblo nicaragüense, el mismo que se enfrentó y derrotó en los años 70 al somocismo y en los 80 al imperialismo gringo, reclama y merece el apoyo de la solidaridad internacional en esta encrucijada histórica. Su lucha es una lucha justa, y la represión con la que el orteguismo ha respondido a sus reclamos es inaceptable y criminal. Lamentablemente, tras casi 3 meses de luchas, el tema ha dejado de ser noticia, por ello nuestra solidaridad resulta ahora crítica para evitar que continúe el baño de sangre.

Frente a una cierta izquierda dogmática y/o desinformada, que incluso ahora mantiene su apoyo a Ortega, desde el Círculo de Cooperación y Solidaridad Internacional de Podemos consideramos que esta es otra ocasión de demostrar nuestro internacionalismo solidario desde el apego a los hechos y a la defensa de los derechos humanos.

Una vez más, con Gramsci: “la verdad siempre es revolucionaria”.